

INE/CG680/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

DENUNCIANTES: MARÍA DIONISIA GONZÁLEZ COLORADO Y ROSA MARÍA HERNÁNDEZ ROSAS

DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA PRESUNTA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE MARÍA DIONISIA GONZÁLEZ COLORADO Y ROSA MARÍA HERNÁNDEZ ROSAS POR EL POSIBLE ABUSO DEL EJERCICIO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL PARTIDO POLÍTICO DENUNCIADO DE NOMBRARLAS, SIN SU CONSENTIMIENTO, COMO SUS REPRESENTANTES PROPIETARIAS ANTE UNA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, UTILIZANDO PARA ELLO, DE FORMA INDEBIDA SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DEOE</i>	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral

G L O S A R I O	
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>JLE</i>	Junta Local Ejecutiva
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PVEM</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Sistema de Registro</i>	Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
<i>UTF</i>	Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral

A N T E C E D E N T E S

1. DENUNCIA.¹ El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron los escritos de queja firmados, respectivamente, por **María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas** quienes, alegaron el posible indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrarlas representantes de mesa directiva de casilla atribuida al **PVEM** y, en su caso el uso de sus datos personales para tal fin.

2. REGISTRO, PREVENCIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.² El once de agosto de dos mil veintiuno, mediante acuerdo

¹ Visible a páginas 001 a 006 del expediente

² Visible a páginas 007 a 015 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

emitido por el Titular de la *UTCE*, se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado bajo la clave **UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021**.

Asimismo, se reservó lo conducente a la admisión y emplazamiento de las partes, hasta en tanto finalizara la etapa de investigación.

Adicionalmente, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió al *PVEM* y a la *JLE* de este Instituto en Veracruz, a efecto de que proporcionaran información relacionada con el indebido registro de las quejas como representantes de mesa directiva de casilla, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio/correo electrónico	Respuesta
<i>PVEM</i>	INE-UT/08426/2021	24/08/2022 Correo electrónico ³ por medio del cual remitió el oficio PVEM-INE-501/2021
<i>JLE</i>	Correo electrónico	31/08/2021 Correo electrónico ⁴ por el que remite el oficio INE/JD13-VER/01895/2021

3. DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN. Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó realizar la diligencia que se precisa enseguida:

Persona requerida	Oficio	Respuesta
13 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Veracruz	Correo electrónico	Correo electrónico ⁵ por el cual remitió el oficio INE/JD13-VER/2177/2021

4. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.⁶ Mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitieron a trámite las denuncias y se ordenó emplazar al *PVEM*, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su

³ Visible a fojas 022 a 031 del expediente.

⁴ Visible a fojas 032 a 044 del expediente.

⁵ Visible a fojas 053 a 059 del expediente.

⁶ Visible a fojas 060 a 066 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes, en relación a los hechos denunciados.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Denunciado	Oficio	Citatorio – Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
<i>PVEM</i>	INE-UT/10391/2021	Citatorio: 30/11/2021 Cédula: 01/12/2021 Plazo: Del 02 al 08 de julio de 2021.	Escrito ⁷ signado por el Representante Suplente del <i>PVEM</i> ante el <i>Consejo General</i> .

5. VISTA DE ALEGATOS.⁸ Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
María Dionisia González Colorado	INE/JD13- VER/0138/2022	Notificación: 24/01/2021 Plazo: del 24 al 28 de enero de 2022.	Sin respuesta
Rosa María Hernández Rosas	INE/JD13- VER/0206/2022	Notificación: 02/02/2022 Plazo: del 03 al 10 de febrero de 2022	Sin respuesta
Denunciado	INE-UT/00243/2022	Citatorio: 18/01/2022 Cédula: 19/01/2022 Plazo: Del 20 al 26 de enero de 2021.	Sin respuesta
<i>PVEM</i>			

⁷ Visible a hojas 76 a 85 del expediente.

⁸ Visible a hojas 86 a 90 del expediente.

6. ELABORACIÓN DE PROYECTO. Toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

7. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Cuarta Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada el doce de octubre de dos mil veintidós, el citado órgano colegiado aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes y ordenó su remisión a este órgano colegiado para su aprobación definitiva.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 23, párrafo 1, inciso j) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t), u) e y), de la *LGPP*, derivado del posible indebido ejercicio del derecho constitucional y legal del *PVEM* de nombrar a **María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas**, como sus representantes en mesas directivas de casilla, vulnerando con ello su derecho a participar de manera libre en los asuntos políticos del país, al poderseles vincular sin su previo consentimiento, con un partido político al cual no desea pertenecer; utilizando para ello, de forma indebida, sus datos personales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

Ahora bien, conforme al artículo 25 de la *LGPP*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en las leyes electorales federales y locales, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicha Ley, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 25 de la *LGPP*, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PVEM*, derivado, esencialmente, por el posible indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrar a las ciudadanas antes precisadas, como representantes ante mesa directiva de casilla, sin su consentimiento.

Sirve de apoyo lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de la ciudadanía a los partidos políticos, desde la vertiente al derecho a no ser vinculado o relacionado con un partido político sin el consentimiento del titular, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.

⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por transgresión a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por la transgresión a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de la ciudadanía.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIFE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre participación política.

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO

1. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* incurrió en un posible ejercicio indebido de su derecho constitucional y legal de registrar a **María Dionisia González Colorado** y **Rosa María Hernández Rosas** sin su consentimiento como sus representantes ante mesa directiva de casilla durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, utilizando indebidamente para ello sus datos personales.

2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Al momento de dar respuesta al emplazamiento, el denunciado hizo valer las siguientes excepciones y defensas:

- *Las quejas exponen que su aparición como representantes de casilla del Partido Verde Ecologista de México fue sin su consentimiento, sin embargo,*

conforme a las constancias que integran el expediente, las quejas no participaron como representantes ante mesa directiva de casilla de este partido político, durante la jornada electoral 2021.

- *Las quejas no sustentan su dicho en absolutamente ningún medio de prueba, sino que únicamente se basan en la consulta que el día 17 de mayo de 2021, la 13 Junta Distrital Ejecutiva en Veracruz realizó al Sistema de Registro de Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante mesas directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, con el fin de llevar a cabo la compulsa para verificar que las quejas que aspiraban a participar como CAE, no estuvieran inscritas a algún partido político.*
- *Según lo informó la 13 Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz, se realizó la sustitución de las quejas, por lo que en el Sistema no se generó el nombramiento correspondiente y por lo tanto no existe una acreditación indebida de las quejas.*

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, al momento de contestar el emplazamiento tienen que ver con el fondo de la controversia.

3. MARCO NORMATIVO

A efecto de determinar lo conducente respecto de la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula el derecho de la ciudadanía a una participación política libre e informada, el procedimiento del derecho a registrar a representantes ante mesas directivas de casilla por parte de los partidos políticos, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares, vigentes al momento de la comisión de la supuesta infracción.

A. Derecho ciudadano a una participación política libre e individual

Los artículos 1 y 35, de la *Constitución* establecen, respectivamente, la titularidad de los derechos humanos en beneficio de todas las personas y la libertad de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país.

Por otro lado, en el artículo 23, de la *LGPP*, se reconoce el derecho de los partidos políticos de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como de nombrar representantes ante los órganos del *INE* o de los Organismos Públicos Locales; asimismo en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), del mismo ordenamiento, se prevé la obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de las y los ciudadanos.

En ese sentido, el derecho de los partidos políticos de participar en la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de nombrar representantes, encuentra límites en el derecho de la ciudadanía de participar libremente en los asuntos políticos del país, pues deben conducirse dentro de los cauces legales respetando los derechos de terceros, de ahí que la comisión de alguna conducta que implique la inobservancia a dichos límites implica una vulneración al orden constitucional.

En efecto, las y los ciudadanos mexicanos tienen en todo momento el derecho a participar libre y activamente en los asuntos políticos del país, siendo una de las vías idóneas los partidos políticos, a través del derecho de asociación y de afiliación, sin embargo, esos derechos se traducen, desde una vertiente negativa, también a no ser asociados o vinculados con éstos sin su consentimiento, toda vez que representan ideologías y principios con los cuales no necesariamente los ciudadanos comulgan o se identifican.

De ahí que el derecho ciudadano de participación política de asociación y afiliación implica, también, el derecho a no ser vinculado o relacionado con un partido sin el

consentimiento expreso de su titular, en tanto que una vinculación con un partido político, de la forma en que se presente, sugiere o pudiera interpretarse que existe cierta simpatía o militancia a ese instituto político, aun cuando la ciudadana o ciudadano no hayan manifestado en modo alguno su preferencia por éste, o bien expresado su consentimiento para que se le vincule con el mismo.

Así, la necesidad de que exista un consentimiento expreso de las y los ciudadanos para que su nombre y datos personales sean vinculados con alguna fuerza política, subyace del derecho a la imagen y de asociación política cuyo núcleo esencial se encuentra protegido en la *Constitución* y en diversos instrumentos internacionales.

En efecto, en el primer párrafo del artículo 6 constitucional, se establece que la libre expresión de ideas encuentra su límite en la vida privada y los derechos de terceros. Asimismo, en el apartado A, fracción II, se prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones previstas en la legislación secundaria.

En igual sentido, en el artículo 11, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que nadie puede ser objeto de ataques ilegales en su imagen, honra y reputación.

De lo anterior se desprende que la imagen es un valor universal construido con base en la opinión, percepción o buena fama de la ciudadanía, de ahí que la percepción que cada persona desea construir en torno a ello se basa en las preferencias o consideraciones de la propia persona, de ahí que los partidos políticos no pueden, sin que exista consentimiento expreso del ciudadano, utilizar su nombre e imagen para sus propios fines.

En ese orden de ideas, en el artículo 41, base I, párrafo primero de la *Constitución*, se establece el derecho de las y los ciudadanos de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, por otra parte, en el artículo 16, párrafo 1, de la Convención

Americana Sobre Derechos Humanos y 22, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se prevé el derecho de asociación política.

Sobre esto mismo, la *Sala Superior*¹⁰ ha establecido que el derecho de afiliación faculta a su titular para:

1. Afiliarse a una determinada opción política.
2. No afiliarse a ninguna opción política.
3. Conservar o incluso, ratificar su afiliación.
4. Desafilarse a una determinada opción política.

Sobre esta base, la Sala Regional Especializada del *Tribunal Electoral* ha dispuesto¹¹ que el núcleo básico de dicha prerrogativa fundamental se refiere justamente a la libertad que tiene una persona de decidir si se vincula con alguna fuerza política o, por el contrario, se abstiene o niega a establecer algún tipo de relación de esa índole.

Asimismo, dicho órgano jurisdiccional sostuvo que, *si la base fundamental que sustenta el derecho de afiliación radica justamente en que el ciudadano debe tener la voluntad propia y libre de vincularse con determinado partido político, resulta factible estimar que un individuo se ve afectado en dicho derecho cuando, sin que medie consentimiento, se le relaciona con una determinada fuerza política y, más aun, cuando tal vinculación se efectúa en forma pública.*

Esto es, si el derecho de afiliación impide de suyo que al ciudadano/a se le obligue en algún modo a pertenecer a determinada fuerza política, con mayor razón, se encuentra prohibido que la vinculación con una opción política se haga en forma pública y en contra de la voluntad del ciudadano/a.

¹⁰ SUP-RAP-324/2009 y jurisprudencia 24/2002, de rubro: **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

¹¹ Dicho criterio fue adoptado por la Sala Regional Especializada del *Tribunal Electoral* en los medios de impugnación identificados con las claves SRE-PSC-94/2015 y SRE-PSC-45/2016, éste último confirmado por la *Sala Superior* el SUP-REP-96/2016 y acumulado.

B. Derecho de los partidos políticos a registrar a representantes ante mesas directivas de casilla o representantes generales.

La *LGIPE* prevé como parte de los derechos de los partidos políticos, registrar representantes ante las mesas directivas de casilla o generales, con la finalidad de que puedan observar todo el procedimiento de votación, como salvaguarda necesaria para la integridad y transparencia de la elección.

En efecto, en el artículo 259 de la *LGIPE*, se establece lo siguiente:

1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios...

3. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla...

A su vez, en el artículo 262, párrafo 1, de la Ley en cita, se establece que el registro de los nombramientos de las/los representantes ante las mesas directivas de casilla y de las/los representantes generales se hará ante el Consejo Distrital correspondiente; asimismo, determina las reglas a las que deberá sujetarse.

En el artículo 264, párrafo 1, de la *LGIPE*, se prevé que los nombramientos de las y los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:

- a)** Denominación del partido político o nombre completo del candidato/a independiente;
- b)** Nombre del representante;
- c)** Indicación de su carácter de propietario o suplente;
- d)** Número del Distrito electoral, sección y casilla en que actuarán;
- e)** Clave de la credencial para votar;
- f)** Lugar y fecha de expedición; y

g) Firma del representante o del dirigente que haga el nombramiento.

En este tenor, el dispositivo 265, párrafo 1, del referido ordenamiento legal, establece que los nombramientos de las/los representantes generales deberán contener los mismos que los nombramientos de las/los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.

Por su parte el acuerdo **INE/CG298/2020** aprobado por este *Consejo General* relativo a dicho procedimiento, **vigente al momento de la posible falta**, de rubro “*ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SOLICITUDES, SUSTITUCIONES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL MISMO.*”,¹² se aprobaron las formas que contienen los requisitos y datos que deberá reunir la documentación que los partidos políticos utilizaron para registrar a sus representantes ante las mesas directivas de casilla y representantes generales, para la jornada electoral del **seis de junio de dos mil veintiuno**.

Además, se estableció que la *DEOE*, proporcionaría a las/los dirigentes y representantes de los partidos políticos nacionales y locales debidamente acreditados ante los Consejos Distritales del Instituto, el acceso a un sistema informático que facilitaría el llenado y generación de las formas referidas, con la finalidad de que lo utilizaran con preferencia para el registro de sus representantes ante mesa directiva de casilla.

Asimismo, se previeron las siguientes fechas, para el desarrollo de actividades en el ejercicio del derecho de los partidos políticos a nombrar representantes generales y ante mesas directivas de casilla:

¹² Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114663/CGor202009-30-ap-19-Gaceta.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

Actividad	Fecha/Periodo
Solicitud de cuentas de acceso por parte de los partidos políticos y candidatos independientes nacionales	18 de enero-15 de marzo de 2021
Entrega de cuentas de acceso a partidos políticos y candidatos independientes nacionales, así como a partidos políticos en el ámbito local.	18 de enero-22 de marzo de 2021
Pruebas de acceso y simulacro.	01-09 de abril de 2021
Inicio de registro de solicitudes/sustitución de representantes (registro individual y/o carga por lote).	16 de abril de 2021
Inicio de cruces de información	21 de abril de 2021
Límite para carga por lote.	24 de mayo de 2021
Límite para sustituciones por lote.	24 de mayo de 2021
Límite para registro individual.	24 de mayo de 2021
Límite para sustituciones individuales	27 de mayo de 2021
Fecha para asentar firma digitalizada y sellos digitales en los nombramientos.	28 de mayo de 2021
Fecha a partir de la que se pueden realizar consultas y, en su caso, descarga e impresión de nombramientos con firma digitalizada y sellos digitales.	29 de mayo de 2021

Lo anterior, bajo el modelo para la operación del sistema que incluye los rubros siguientes:

“Fase 1. Solicitud de acceso al Sistema

Los PP¹³ deberán presentar por escrito la solicitud para obtener las cuentas de acceso al Sistema, tanto a nivel central como distrital en el periodo que comprende del 18 de enero de 2021 y hasta el 15 de marzo del mismo año, con la finalidad de garantizar su participación en las pruebas y simulacros del Sistema. Las CI¹⁴ realizarán la solicitud una vez que se apruebe su candidatura en el SNR¹⁵.

Los PPN¹⁶ realizarán la solicitud a través de sus representaciones ante el CG¹⁷ del Instituto; mientras que las CI del ámbito federal la presentarán ante el CD¹⁸ correspondiente. Los PPL y CI del ámbito local solicitarán por escrito al Consejo General del OPL¹⁹ correspondiente las cuentas y contraseñas de acceso al Sistema; dicha solicitud se remitirá inmediatamente por el OPL a la UTVOP²⁰ por medio de la JLE²¹. La UTVOP deberá hacerlas llegar dentro de las siguientes 24 horas a la DEOE para la gestión correspondiente.

Fase 2. Generación y distribución de cuentas de acceso

A partir del 18 de enero de 2021, la DEOE gestionará ante la UTSI²² la generación de las cuentas y claves de acceso para los PPN, PPL²³ y, en su caso CI del ámbito federal y local; mismas que en el caso de los PPN se entregarán, previa solicitud, a su representación ante el *Consejo General*, a más tardar el 22 de marzo de 2021.

Los PPN a más tardar el 23 de marzo de 2021, podrán solicitar por escrito a la DEOE la distribución de sus cuentas a sus representaciones en los CD²⁴, misma que se realizará por medio de los órganos desconcentrados, quienes

¹³ Partidos Políticos Nacionales y Locales

¹⁴ Candidaturas Independientes

¹⁵ Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos

¹⁶ Partidos Políticos Nacionales

¹⁷ Consejo General

¹⁸ Consejos Distritales

¹⁹ Organismos Públicos Locales

²⁰ Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

²¹ Juntas Locales Ejecutivas

²² Unidad Técnica de Servicios de Informática

²³ Partidos Políticos Locales

²⁴ Consejos Locales

recabarán los acuses y los remitirán a la *DEOE* dentro de las 24 horas siguientes.

La *DEOE* notificará a los órganos desconcentrados del Instituto sobre la entrega de las cuentas de acceso, para que la o el Vocal Secretario del CD, a su vez, lo comunique a las y los representantes de los PPN; en su caso, la o el Vocal Secretario entregará las cuentas y claves de acceso correspondientes al Sistema, a la persona acreditada por los PPN o CI, recabará el acuse correspondiente y lo remitirá inmediatamente por correo electrónico a la JLE, ésta a su vez lo enviará a la *DEOE*.

Las cuentas de acceso de los PPL y CI del ámbito local, serán entregadas por la *DEOE* a la UTVOPPL para que, a su vez, se hagan llegar al OPL por medio de la JLE. Cuando los PPL o CI del ámbito local reciban sus cuentas y claves, se recabará el acuse y se remitirá de manera inmediata a la *DEOE* por la misma vía de entrega.

Las cuentas de acceso de las CI del ámbito local serán entregadas a los OPL, a más tardar 72 horas después de que sean aprobadas en el SNR. Los OPL tendrán 24 horas para entregarla a la candidatura que corresponda, siempre y cuando medie la solicitud señalada en la Fase 1.

Fase 3. Captura de responsables del registro

Recibidas las cuentas de acceso, los PP y, en su caso, las CI podrán dar de alta en el Sistema a la persona responsable del registro de solicitudes y sustituciones de sus representantes a partir del inicio de las pruebas de acceso señaladas en la Fase 4; dicha persona participará en los ejercicios a los que se refiere la misma fase.

Tanto la firma como el nombre de la persona que se capture como responsable del registro en el Sistema, aparecerá en las acreditaciones de los representantes generales y ante mesas directivas de casilla, como la que

realiza la acreditación, por lo que los PP y CI, deberán prestar especial atención en la designación de esta figura.

Fase 4. Pruebas de acceso y simulacro de operación del Sistema

Entre el 1 y el 9 de abril de 2021 se llevarán a cabo pruebas de acceso y un simulacro, con la intención de que las personas usuarias se familiaricen con la operación del Sistema; en dichos eventos participarán PP y CI y personal de las juntas ejecutivas.

A más tardar el 19 de marzo de 2021, las JDE de las 32 entidades deberán remitir a la DEOE por conducto de la respectiva JLE, cinco cuentas de personas usuarias del personal que labora en las subdelegaciones para que participen en los ejercicios, a fin de que se familiaricen con la operación del Sistema y, en su caso, se identifiquen fallas en su funcionamiento para que se corrijan previo a su operación en producción. A su vez, para los mismos fines, las JLE remitirán tres cuentas del personal adscrito a las propias delegaciones.

Es menester resaltar que el Sistema incorpora un-Centro de Ayuda con guías de uso destinadas a los diferentes usuarios para la correcta operación; no obstante, las representaciones de los actores políticos podrán acudir con las presidencias de los CD y CL²⁵ a fin de solicitar asesorías sobre el funcionamiento del Sistema.

Una vez concluidas las pruebas de acceso y el simulacro, la DEOE cancelará los permisos de captura de las cuentas de usuario del personal de las juntas ejecutivas; manteniendo activas únicamente las de las personas titulares de las vocalías Ejecutiva y del Secretario.

²⁵Consejos Locales

Fase 5. Modalidades para la captura

Los PP y CI, realizarán la captura de la información de sus representantes en las modalidades siguientes:

- a) En una plantilla en Excel, que podrán descargar del Centro de Ayuda del Sistema, o que les proporcionará la JDE o, en su caso la JLE, la cual les permitirá incorporar información de sus representantes fuera de línea, una vez concluida la captura, la plantilla les generará un archivo cifrado que podrán subir al Sistema
- b) Directamente en el Sistema a través de captura individual, es decir, un representante a la vez.
- c) Carga al Sistema por lotes, a través de archivos de texto, esta opción les permitirá ingresar al Sistema uno o más registros en una sola operación. A través del validador disponible en el Centro de Ayuda del Sistema y dentro del Sistema en los módulos de "Registro masivo (txt)" y "Sustitución masiva (txt)" que, en su caso, también podrá proporcionar la JDE. procesarán sus propios archivos de texto plano para verificar su estructura y generar archivos cifrados, para cargar al Sistema.

Se debe considerar lo siguiente:

- El Sistema permitirá cargar cada archivo sólo una vez.
- Durante el periodo de captura y hasta el cierre de sustituciones, los cruces se realizarán continuamente.
- Durante el periodo de registro, y hasta el periodo de sustituciones se pueden capturar representantes.

- Los PP y CI contarán con una herramienta que les permita validar los archivos de texto plano, previo a su carga en el Sistema, con la finalidad de garantizar que el archivo esté adecuadamente conformado y cumpla con las características necesarias para el registro de información.

Plazos de registro de solicitudes

Del 16 de abril y hasta el 24 de mayo de 2021, los PP y CI podrán realizar la captura de solicitudes de acreditación de representantes; dentro de dicho periodo se permitirá la carga de solicitudes individual y por lote, en los términos precisados en esta fase.

Fase 6. Número de representantes a acreditar

Los PPN podrán acreditar a dos representantes propietarios y dos suplentes ante cada mesa directiva de casilla. Los PPL y CI, podrán acreditar a un representante propietario y un suplente ante cada casilla.

Los PP y CI podrán acreditar a un representante general por cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas no urbanas, del Distrito Electoral uninominal o en el ámbito territorial de su interés jurídico, tal y como lo señala el artículo 255 del RE²⁶.

Toda vez que la determinación del número, ubicación e integración de casillas es un elemento fundamental para el inicio del registro de representantes, pues con base en dicha determinación, la cifra de representantes generales deriva del número y tipo de casillas aprobadas por Distrito para la elección de que se trate, y debido a que, esta cifra puede variar por causas supervenientes, el número de representantes se presentará desde el inicio de la operación del Sistema, conforme a la aprobación de casillas existentes, tomando como base el número y tipo de casillas aprobadas por Distrito Electoral federal, local o

²⁶ Reglamento de Elecciones

municipio. lo anterior bajo el principio de máxima representación, conforme a lo establecido en el artículo 255, numerales 6 y 7 del RE.

En el caso de las representaciones de los PPN ante casilla, el Sistema permitirá registrar dos propietarios y dos suplentes, por lo que no podrá registrarse mayor número de solicitudes para su acreditación. En lo que respecta a los PPL y CI, el sistema solo permitirá el registro de un representante propietario y un suplente.

En aquellos casos en los que los PP o CI, registren un mayor número de solicitudes de representantes generales a las que se tiene derecho, las y los secretarios de los CD, acreditarán a las personas que fungirán como representantes generales y que no tengan observaciones como resultado de los cruces de información que se mencionan en la Fase 7 de este Modelo, respetando el orden en el cual fueron registrados y se presentan en el Sistema , hasta llegar al número máximo a acreditar .

Las secretarías de los CD podrán realizar el ajuste del número de representantes generales, solicitando al PP o CI correspondiente , señalen cuales de las solicitudes registradas serán las que deban acreditarse; para ello, es necesario tener cuidado de que las que señalen, no tengan observaciones como resultado de los cruces de información que se mencionan en la Fase 7 de este Modelo, el periodo para que los actores políticos señalen a las personas que fungirán como representantes generales será del 25 al 27 de mayo de 2021.

Fase 7. Cruces de información

Una vez que la persona usuaria complete el registro de la solicitud de acreditación, el cual podrá verificar en el Sistema, se comenzarán a realizar los cruces de información.

Dentro de las 48 horas siguientes a la captura, las personas usuarias podrán revisar en el módulo de consulta si las solicitudes cuentan o no con posibles causales de rechazo.

En todo momento se podrán realizar sustituciones de registros, siempre y cuando lo hagan, a más tardar el 27 de mayo de 2021, conforme a la Fase 9 del presente Modelo.

Los cruces de información se realizarán considerando lo siguiente:

- A más tardar el 18 de abril de 2021, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará a la UTSI la Lista Nominal de Electores Definitiva con corte al 10 de abril de 2021, misma que servirá de base para la validación de representantes. Los cruces de información se realizarán a partir del 21 de abril de 2021.

De igual manera, se deberán aplicar por las áreas del Instituto que participan, así como las representaciones partidistas los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad necesarios para resguardar la confidencialidad de la información entregada y contenida en dichos instrumentos, a fin de evitar algún uso distinto al expresamente previsto en la normatividad, así como evitar su alteración , pérdida, transmisión y uso no autorizado .

- El 21 de abril de 2021, el Sistema iniciará las validaciones contra la LNED²⁷, para determinar si puede continuar con el proceso de registro y el derecho de votación de las y los representantes en la casilla en que serán registrados.
- A partir de ese momento, el Sistema iniciará con los cruces de los datos de los representantes contenidos en las solicitudes de registro de

²⁷ Lista Nominal de Electores Definitiva

acreditación que se encuentran en la LNED, contra las siguientes bases de datos:

- Funcionario o funcionaria de Mesa Directiva de Casilla
- (FMDC²⁸),
- Listas de reserva de FMOC.
- Sustituciones de FMDC,
- SE y CAE,
- Listas de reserva de SE y CAE,
- Observadores Electorales,
- Candidaturas aprobadas,
- Representantes de otros PPL, PPN y CI.

En el caso específico de los cruces que se realicen contra las listas de reserva de SE y CAE, y que resulten con observación, esto no deberá entenderse como una causal de rechazo, sino solamente como una alerta de su posible cambio de estatus a SE o CAE, por lo que las y los secretarios de los CD deberán acreditar las solicitudes que se encuentren en este supuesto.

Por otra parte, para garantizar la integración de las MDC, ningún ciudadano o ciudadana que haya sido designada como FMDC podrá ser acreditada como representante de PP o CI, ya sea que haya aceptado el nombramiento, sido sustituida, o bien, se encuentre en lista de reserva; razón por la cual, los CD deberán negar la acreditación de dichos ciudadanos y ciudadanas como representantes.

En cuanto a las y los ciudadanos que hayan sido acreditados por un PP o CI previamente, prevalecerá lo señalado en el artículo 261, numeral 1, inciso i) del RE; a excepción de cuando exista manifestación por escrito del ciudadano o ciudadana de su intención por ser representante de otro partido y ésta se presente a más tardar dentro del periodo de sustituciones, garantizando la protección de sus derechos en todo momento.

²⁸ Funcionario de Mesas Directivas de Casilla

Fase 8. Resultados

A partir del 24 de abril de 2021, los PP y CI serán responsables de verificar constantemente en el Sistema, el estatus de sus representantes registrados (con causal de rechazo y sin causal de rechazo).

De existir cambios en los Sistemas de Observadores Electorales, CAE y SE, Funcionarios de Casilla y Registro de Candidatos , se realizarán nuevamente los cruces contra los representantes con causal de rechazo y sin causal de rechazo, para que, en su caso, los PP y CI realicen las sustituciones dentro del plazo establecido.

Los resultados de los cruces de información serán de carácter definitivo una vez que haya concluido la etapa de acreditaciones, es decir, a partir del 29 de mayo de 2021.

Fase 9. Sustituciones

El Sistema permitirá realizar la sustitución de representantes de forma individual y por lote desde el primer día de registro y hasta el 24 de mayo de 2021; durante el periodo exclusivo para sustituciones 25, 26 y 27 de mayo, sólo podrán realizarlas de forma individual.

Fase 10. Acreditación de representantes, generación e impresión de listados de representantes ante MDC y generales.

A partir de las 08:00 horas del 28 de mayo de 2021, toda vez que ha concluido el periodo de sustituciones , las y los secretarios de los CD ingresarán al sistema para:

- a) Acreditar a las y los representantes y generar los nombramientos definitivos con la firma digitalizada y su correspondiente sello digital.

- b) Generar los listados de representantes generales y ante mesa directiva de casilla que acompañarán los paquetes electorales federales.

Durante el proceso de acreditación de las representaciones, las y los secretarios de los CD deberán identificar aquellas solicitudes de acreditación que presenten observaciones por encontrarse en las bases de datos, debiendo atender lo dispuesto en el artículo 261, numeral 1, inciso h) del RE, para que en el supuesto de que algún PP o CI, pretenda registrar como representante general o ante MDC²⁹, a persona ciudadana que haya sido acreditada como observador electoral o contratada como SE³⁰ o CAE³¹, requieran a la persona ciudadana que exprese por cuál opción se pronuncia. Si la persona interesada manifiesta su decisión de participar como observadora electoral, SE o CAE, le será notificado al PP o CI para que realice la sustitución correspondiente, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo establecido para sustituciones. Si la persona ciudadana manifiesta que su decisión es actuar como representante, se dejará sin efectos su acreditación como observador electoral, SE o CAE, según el caso. Si no se recibiera respuesta alguna, o no fuera posible contactar a la persona ciudadana, el Instituto mantendrá vigente la acreditación que hubiera otorgado a ésta. En el caso de que la persona ciudadana se encuentre en lista de reserva de SE o CAE; en atención de lo que se señala en la Fase 7 de este Modelo se procederá a realizar la acreditación como representante.

Una vez concluido el proceso de acreditación, las y los presidentes de los CD deberán garantizar que se proceda a generar desde el Sistema los listados de representantes ante MDC y generales, imprimirlos, clasificarlos e integrarlos a la documentación electoral federal que se debe entregar a las presidencias de las mesas directivas de casilla.

²⁹ Mesas Directivas de Casilla

³⁰ Supervisores Electorales

³¹ Capacitadores Asistentes Electorales

Adicionalmente, para facilitar el registro durante la Jornada Electoral de la asistencia, de la votación de las y los representantes por parte de las y los secretarios de las MDC, y la colecta de información sobre la asistencia por parte de las y los CAE para realizar su reporte al SIJE, el órgano encargado de integrar la documentación electoral federal para entregarla a las presidencias de MDC, deberá agrupar con la Lista Nominal correspondiente , la relación de las representaciones de PP y CI acreditadas ante las MDC respectivas. Concluido el escrutinio y cómputo de la casilla, las relaciones de representantes de PP y CI se introducirán en la bolsa para lista nominal de electores; con ello se garantiza que dichas relaciones sean devueltas a los Consejos Distritales correspondientes.

Fase 11. Nombramientos definitivos

A partir del 29 de mayo de 2021, las personas responsables del registro de las y los representantes de los PP y CI podrán consultar y, en su caso, descargar e imprimir los nombramientos definitivos con la firma digitalizada y su correspondiente sello digital; del mismo modo, la información estará disponible en el Sistema para consulta de los consejos, juntas ejecutivas y Oficinas Centrales .

Fase 12. Presencia de Representantes en casilla

Toda vez que las listas de representantes de los PP y CI estarán integradas a los paquetes electorales, no será necesario que las y los ciudadanos que ostentan la representación lleven impreso su nombramiento. No obstante, las y los representantes deberán llevar su credencial para votar, para identificarse ante la Presidencia de la MDC y ejercer su derecho al sufragio en la casilla en la que sean acreditados, de acuerdo con lo que señale la relación de representantes.

Ahora bien, respecto a la obligación contenida en el artículo 216 bis del Reglamento de Fiscalización, consistente en el pago por concepto de la

actividad desplegada por los representantes generales y de casilla el día de la Jornada Electoral, los PP y C1 deberán estarse a lo previsto en el ordenamiento que se emita para tal efecto.

La información en materia de fiscalización que se incorpore al Sistema, así como la posible apertura de los módulos correspondientes en fechas posteriores a la establecida en el presente Acuerdo, estarán bajo la supervisión y coordinación de la *UTF*, por lo que cualquier duda respecto a la incorporación de la información o sobre el contenido de ésta al identificarse ante la presidencia de MDC, y en su caso, ejercer su derecho al sufragio en la casilla en que sean acreditados de acuerdo con lo que señale la relación de representantes.

Adicionalmente, a más tardar el 16 de julio de 2021 las JDE capturarán las asistencias de las y los representantes en las casillas, tomando la información tanto de las actas de la Jornada Electoral como de las de Escrutinio y Cómputo de la elección federal.”

C. Protección de datos personales

a. *Constitución*, tratados Internacionales y criterios jurisdiccionales.

El derecho humano a la vida privada o a la intimidad, se tutela de manera general en los artículos 6 y 16, de la *Constitución* y en los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano, de conformidad con los artículos 1º y 133 de nuestra Carta Magna.

En ese sentido, los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la vida privada de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus datos personales y la demás información relativa a su vida privada que estén en poder de algún ente

público o de particulares, y protegerse de la posible utilización indebida por terceros.

A su vez, el artículo 6, base A, fracción II, de la *Constitución* establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

El artículo 16 constitucional, en sus dos primeros párrafos, dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; y que **toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley**, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

En ese sentido, con la reforma al artículo 16 constitucional se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios. Dentro de los más importantes podemos señalar los de licitud, proporcionalidad, calidad seguridad y finalidad.

Licitud: el tratamiento de datos personales deberá obedecer exclusivamente a las facultades, atribuciones o competencias que la normatividad aplicable les confiere.

Proporcionalidad: sólo se deberán tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Calidad: implica, entre otras cuestiones, que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el

cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate.

Seguridad: se deberán establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Finalidad: los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse únicamente para la o las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas finalidades deberán ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas.

Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios internacionales complementarios en materia de protección de datos que es pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.

Límite de uso: consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados para propósitos distintos para los que fueron recabados.

Protección a la seguridad: consiste en proteger los datos personales e información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos, como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o divulgación de datos.

Responsabilidad: consiste en la responsabilidad del controlador de datos de cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios anteriormente enunciados.

Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la persona misma.

La afirmación anterior tiene sustento debido a que el conjunto de datos personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual pertenecen, sino la posibilidad de inferir a partir de ellos, datos sensibles de las personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado.

Así, el siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6 de la *Constitución*, la cual fija las bases para la creación de una ley general de protección de datos personales.

En otro orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el Amparo directo en revisión 2420/2011, entre otras cuestiones, que **ese consentimiento debe otorgarse de manera expresa, por tanto, la autoridad deberá objetivarlo por escrito o mediante cualquier otro procedimiento que facilite su prueba y denote un consentimiento claro e indudable.**

Asimismo, la Suprema Corte en el diverso amparo directo en revisión 1656/2011 y en la contradicción de tesis 38/2012, determinó que el derecho al respeto de la vida privada deriva de la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad principal es el reconocimiento a un ámbito de vida privada personal y familiar que, por regla general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás. Tal derecho puede extenderse a una protección que va más allá del domicilio, como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la vida privada, puesto que puede abarcar papeles, posesiones, datos personales del gobernado.

Bajo dicha lógica, la Suprema Corte ha establecido que los rasgos característicos de la noción de lo “privado” se relacionan con: a) lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; c) lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d) las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; y, e) aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.

En cuanto a la vida privada, en un ámbito más amplio y derivado del desarrollo tecnológico, se advierte que se pueden vulnerar otros aspectos de la esfera de la persona, tal como sus datos personales.

Ahora bien, en cuanto al derecho a la intimidad, la Suprema Corte ha determinado en los criterios apuntados, que este se asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, y tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea por parte de particulares o por los poderes del Estado.

Tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia; asimismo, garantiza el derecho a la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser conocida, y cuál debe permanecer en secreto, **así como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información.**

En este orden de ideas, la normativa en la materia define los *datos personales* como la información concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas, que afecten su intimidad.

El *Tribunal Electoral*, ha sostenido que el derecho a la vida privada de las persona, concede a su titular, la atribución de resguardar ese ámbito privado, **con el poder de decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone la facultad de elegir cuáles pueden ser conocidos y cuáles deben permanecer en reserva, además de designar quién y bajo qué modalidades pueden**

utilizarlos, dado que la protección de datos personales incluye el derecho de autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en el manejo y cuidado de las referencias concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada, así el Estado a través de sus órganos adoptará las medidas tendentes a hacer efectiva la tutela del referido derecho.

A su vez, la Sala Regional Especializada ha sostenido que “las leyes respectivas en materia de transparencia y tratamiento de datos personales deben considerar el consentimiento del titular (consentimiento informado), es decir, dar a conocer claramente la finalidad y el propósito del almacenamiento de sus datos y la posibilidad de que éstos sean dados a conocer a terceros.”

b. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

En el artículo 23, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

El artículo 68 de la misma Ley, establece que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

- II.** Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;
- III.** Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los

propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Por último, en el artículo 68 de dicha Ley se establece que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión.

Además, el artículo 116 de la ley en comento, así como el diverso 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

c. Normativa Interna del *PVEM*

El artículo 111, del Estatuto del *PVEM*,³² establece:

- Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Padrón de Afiliados (simpatizantes, adherentes y militantes) del Partido Verde Ecologista de México” y cuya finalidad es crear el banco de datos de afiliados a este Instituto Político y serán resguardados por Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, para su custodia, administración, actualización y ejecución de todo lo relativo al padrón de afiliados, la instancia donde se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento lo es el Consejo Político Nacional en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional.

³² Consulta disponible en: <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf>

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, la denuncia versa sobre la supuesta transgresión a la *LGPP*, derivado del posible indebido ejercicio del derecho constitucional y legal del *PVEM*, de nombrar a **María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas**, como representantes ante mesas directivas de casilla para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, se resumirá la información derivada de la investigación preliminar implementada, respecto de las personas quejasas, así como la conclusión que fue advertida.

A sus escritos de denuncia, **María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas** adjuntaron:

- Capturas de pantalla del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, en la que se aprecia la clave de elector y nombre de dichas ciudadanas, así como los datos de las casillas en que fueron registradas, fecha y hora de su registro.

Con el fin de tener mayores elementos para resolver el fondo del asunto, **la UTCE realizó diversas diligencias**, obteniendo los documentos que se describen a continuación:

- a. Oficio INE/JDE13-VER/01895/2021, suscrito por el Vocal Secretario de la 13 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, información en la que, en lo que interesa a la presente resolución, señala:
 - En nuestros archivos no se encuentra documentación que ampare la acreditación de las ciudadanas María Dionisia González Colorado y de Rosa María Hernández Rosas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

- Remitió copia certificada de las Actas de Jornada de las secciones 1602 B, 1609 B, C1 y C2.

A dicho oficio adjuntó:

- Copia certificada de las actas de Jornada Electoral, de las secciones 1602 B, 1609 B, C1 y C2, en las cuales no se aprecia el nombre y firma de la quejosa en el apartado de representantes de partidos políticos, en concreto en el renglón correspondiente al *PVEM*.
- b. Oficio PVEM-INE-501/2021, mediante el cual el representante suplente del *PVEM* ante el *Consejo General* informó:
- La persona acreditada en el consejo distrital 13 con cabecera en Huatusco, Veracruz, mesa directiva de casilla básica 1602 como representante propietario 1, del partido político que represento, fue la C. María Zita Bayona Quesada. El representante propietario 2 fue la C. Leticia Cortez Rodríguez.
 - Por cuanto hace a la persona que fungió como representante del mencionado en el consejo distrital 13 con cabecera en Huatusco, Veracruz, mesa directiva de casilla básica 1609 contigua 1 como representante propietario 1, del partido que represento, fue la C. Patricia Loyo Tecalco. El representante propietario 2 fue el C. Cecilio Loyo Tecalco.

Para acreditar sus dichos, dicho partido político adjuntó:

1. Copia simple del *Nombramiento de representantes de partido político o candidatura independiente ante mesa directiva de casilla* correspondiente a las secciones 1602 y 1609 del Distrito 13 Electoral Federal en Veracruz, mediante los cuales se puede advertir que las quejas no fueron acreditadas en dichas casillas.

2. Copia simple de las *Actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales*, del Distrito 13 de Veracruz, mediante los cuales se puede advertir que las ciudadanas quejasas no fueron acreditadas en dichas casillas.

c. Oficio INE/JDE13-VER/2177/2021, suscrito por el Vocal Secretario de la 13 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, información en la que, en lo que interesa a la presente resolución, señala:

- Respecto de **María Dionisia González Colorado**, el **PVEM**, **llevó a cabo el registro** de la ciudadana mencionada, a través del *Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes*, dicho **registro lo efectuó de manera directa** ante el sistema antes detallado.
- El **PVEM**, **realizó directamente ante el Sistema** arriba mencionado, **la sustitución de la ciudadana María Dionisia González Colorado** por la C. María Zita Bayona Quesada, **el día 21 de mayo de 2021**, y como consecuencia **al efectuarse la sustitución, el sistema no genera el nombramiento correspondiente**.
- Respecto de **Rosa María Hernández Rosas**, el **PVEM**, **llevó a cabo el registro** de la ciudadana mencionada, a través del *Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes*, dicho **registro lo efectuó de manera directa** ante el sistema antes detallado.

A dicho oficio adjuntó:

- Copias certificadas de las capturas de pantalla del *Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y*

ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, en las que se advierten las fechas y horas de registro de las quejas como representantes de mesa directiva de casilla.

Finalmente, el *PVEM* al momento de contestar el emplazamiento que le fue formulado aportó las siguientes pruebas:

- a. Instrumental de actuaciones.
- b. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.

Las constancias aportadas por la 13 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado y las quejas, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

Conclusiones

1. El *PVEM*, por conducto de su representante, el **cinco de mayo de dos mil veintiuno**, solicitó y **capturó en el Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos** y Candidatos Independientes el registro de **María Dionisia**

González Colorado y Rosa María Hernández Rosas, como representantes propietarias del PVEM ante mesa directiva de casilla, en el Distrito 13 en Huatusco, Veracruz, Sección 1602, Casilla Básica y Sección 1609 C1, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, respectivamente.

2. El **PVEM**, realizó la **sustitución de las ciudadanas** antes mencionadas como representantes de mesa directiva de casilla el **veintiuno de mayo de dos mil veintiuno**.

3. Las quejas **NO participaron como representantes del PVEM** durante la jornada electoral del seis de junio de dos mil veintiuno en las citadas casillas, tal y como se aprecia en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las quejas, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta

(elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad, así como la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Ahora bien, al igual que el derecho de afiliación, **la libertad de participación política es un derecho reconocido y así garantizado para toda la ciudadanía de nuestro país.** Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, como ya fue precisado, en el presente asunto se determinó como materia de controversia si el *PVEM* efectuó el registro de las denunciantes sin que existiera voluntad para acreditarlas como representantes partidistas ante mesas directivas de casilla instaladas en el estado de Veracruz para la jornada electoral federal que tuvo lugar el dos mil veintiuno, lo que implicó el indebido uso de datos personales y como consecuencia, su imposibilidad para participar en el pasado proceso electoral federal ordinario en los cargos de supervisora y/o capacitadora asistente electoral.³³

³³ Lo anterior, de acuerdo con el criterio sostenido por la *Sala Superior* en el SUP-RAP-123/2019.

Por otra parte, como vimos en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado que **las personas denunciantes** fueron registradas por el PVEM como representantes ante mesa directiva de casilla para el Proceso Electoral Federal 2020-2021 a partir de las siguientes constancias:

1. Capturas de pantalla del **Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes**, en las que se advierten los registros como representante de mesa directiva de casilla de las quejas.

Esta probanza resulta sumamente relevante toda vez que **las propias ciudadanas aportaron copia simple de las mismas** al presentar su denuncia y dicha documental es coincidente con la copia certificada que en su momento remitió la 13 Junta Distrital Ejecutiva del *INE* en Veracruz.

María Dionisia González Colorado

The screenshot displays the 'Representantes' system interface. On the left, a sidebar menu includes options like 'Reportes', 'Registro y sustitución', and 'Resumen de registros'. The main area is titled 'Registro individual' and contains search filters for 'Sección' (1602), 'Casilla' (B), and 'Calidad representante' (Propietario 1 (Fideicomit)). A search button labeled 'Buscar' is present. Below the filters, a table titled 'Representantes ante mesa directiva de casilla' lists the registration details. The entry for María Dionisia González Colorado is highlighted with a green box. The table has columns for 'Clave de elector', 'Nombre(s)', 'Calidad representante', 'Sección', 'Casilla', 'Estatus de validación', 'Observaciones', 'Nombre de usuario', and 'Fecha y hora de registro'. The status is 'Favorizado' and the registration date is 05/05/2021 at 14:58:46.

Clave de elector	Nombre(s)	Calidad representante	Sección	Casilla	Estatus de validación	Observaciones	Nombre de usuario	Fecha y hora de registro
[REDACTED]	MARIA DIONISIA GONZALEZ COLORADO	Propietario 1	1602	B	Favorizado	Sin observaciones	ingovem 3912 Partido Político / Candidatura independiente	05/05/2021 14:58:46

Total de registros: 1 Página 1 de 1

Del citado documento (en copia fotostática) se advierte la clave de elector y nombre de la hoy quejosa.

Rosa María Hernández Rosas

The screenshot shows the 'Representantes' (Representatives) section of the INE system. It displays the registration details for Rosa María Hernández Rosas, who is a candidate for the PVEP (Partido Acción Nacional) in the 13th district of Huatusco, Veracruz. The registration is for the 2020-2021 federal electoral process. The system shows the candidate's name, the party, the district, and the registration date. The registration is marked as 'Registrada' (Registered).

Clave de elector	Nombre(s)	Calidad representante	Sexo	Estado	Estado de publicación	Observaciones	Nombre de partido	Fecha y hora de registro	Ver
[REDACTED]	ROSA MARÍA HERNÁNDEZ ROSAS	Representante	F	Veracruz	Publicada	No observaciones	Partido Acción Nacional	02/06/2021 14:57:06	Q

Del citado documento (en copia fotostática) se advierte la clave de elector y nombre de la hoy quejosa.

Debe precisarse que la carga de la prueba para demostrar que las acreditaciones de María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas como representantes del PVEP, en el Distrito 13, en Huatusco, Veracruz, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, fue resultado de una manifestación libre e individual, corresponde al partido político denunciado, y no a las quejas acreditar que no otorgaron su consentimiento para dicho nombramiento, al tratarse de un hecho negativo que no es objeto de prueba.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho que refiere *"el que afirma está obligado a probar"*, recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la LGIPE.

Bajo dicho principio, a quien niega se le releva de la carga de probar, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

En este tenor, si el partido político tiene la carga probatoria de demostrar que la designación de una persona como representante del partido estuvo precedida del consentimiento de la persona quejosa, es decir, tiene que exhibir prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, para que prevalezca el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Ahora bien, en el presente expediente, no existe elemento probatorio alguno del cual se desprenda que las denunciantes hayan otorgado el permiso para el manejo de sus datos personales o algún otro elemento de convicción que permita probar que el partido político obtuvo el consentimiento de la titular para el registro aunque éste no haya sido definitivo.

Lo anterior, de acuerdo con lo señalado por la Sala Superior en el SUP-RAP-123/2019, en cuanto a que el estudio relativo a la utilización de datos personales derivado del incorrecto ejercicio de nombrarla como representante de casilla, no implica que se deje de lado lo referente al derecho de participación política.

Sentado lo anterior, se reitera que los argumentos vertidos por dicho instituto político, en los múltiples requerimientos que le formuló la *UTCE*, se limitaron a señalar que no les asistía la razón a las denunciantes, toda vez que de los nombramientos definitivos como representantes de mesa directiva de casilla en las secciones 1602 básica y 1609 contigua 1, así como las actas de jornada electoral, se advierte que las personas acreditadas para tal efecto fueron diversas a las denunciantes.

Sin embargo, debe señalarse, que el *PVEM* omitió señalar y explicar cómo fue que en un primer momento realizó de manera directa el registro de las ciudadanas y omitió además presentar la documentación que permitiera acreditar que actuó con el

consentimiento de las quejas para el uso de sus datos personales (nombre y clave de elector) aun cuando ese registro no fuese definitivo.

Derivado de lo anterior, es importante precisar que en el presente asunto no es hecho controvertido los nombramientos definitivos del *PVEM*, sino el indebido registro (aunque preliminar) de las hoy quejas como representantes de mesa directiva de casilla, esto es, de las constancias que obran en autos se desprende que las quejas fueron primigeniamente acreditadas en el *Sistema de Registro* por dicho instituto político, y posteriormente se realizó la sustitución de las mismas.

Lo anterior puede advertirse de las copias certificadas de las capturas de pantalla del *Sistema de Registro*, remitidas por la 13 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en Veracruz, en las que se observa que las quejas sí aparecieron registradas por el *PVEM* como sus representantes ante mesa directiva de casilla.

Como ya se ha precisado en el marco normativo de la presente resolución, el artículo 259, párrafo 1, de la *LGIPE*, prevé el derecho de los partidos políticos a nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, así como representantes generales propietarios.

A su vez, el *Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Modelo para la Operación del Sistema de Registro*, prevé dentro de las fases de operación del *Sistema de Registro*, las fases siguientes:

Fase 5. Modalidades para la captura

Los PP y CI, realizarán la captura de la información de sus representantes en las modalidades siguientes:

- d) En una plantilla en Excel, que podrán descargar del Centro de Ayuda del Sistema, o que les proporcionará la JDE o, en su caso la JLE, la cual les permitirá incorporar información de sus representantes fuera de línea, una

vez concluida la captura, la plantilla les generará un archivo cifrado que podrán subir al Sistema

- e) Directamente en el Sistema a través de captura individual, es decir, un representante a la vez.
- f) Carga al Sistema por lotes, a través de archivos de texto, esta opción les permitirá ingresar al Sistema uno o más registros en una sola operación. A través del validador disponible en el Centro de Ayuda del Sistema y dentro del Sistema en los módulos de "Registro masivo (txt)" y "Sustitución masiva (txt)" que, en su caso, también podrá proporcionar la JDE. procesarán sus propios archivos de texto plano para verificar su estructura y generar archivos cifrados, para cargar al Sistema.

...

Plazos de registro de solicitudes

Del 16 de abril y hasta el 24 de mayo de 2021, los PP y CI podrán realizar la captura de solicitudes de acreditación de representantes; dentro de dicho periodo se permitirá la carga de solicitudes individual y por lote, en los términos precisados en esta fase.

Fase 7. Cruces de información

Una vez que la persona usuaria complete el registro de la solicitud de acreditación, el cual podrá verificar en el Sistema, se comenzarán a realizar los cruces de información.

Dentro de las 48 horas siguientes a la captura, las personas usuarias podrán revisar en el módulo de consulta si las solicitudes cuentan o no con posibles causales de rechazo.

En todo momento se podrán realizar sustituciones de registros, siempre y cuando lo hagan, a más tardar el 27 de mayo de 2021, conforme a la Fase 9 del presente Modelo.

Los cruces de información se realizarán considerando lo siguiente:

- A más tardar el 18 de abril de 2021, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará a la UTSI la Lista Nominal de Electores Definitiva con corte al 10 de abril de 2021, misma que servirá de base para la validación de representantes. Los cruces de información se realizarán a partir del 21 de abril de 2021.

De igual manera, se deberán aplicar por las áreas del Instituto que participan, así como las representaciones partidistas los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad necesarios para resguardar la confidencialidad de la información entregada y contenida en dichos instrumentos, a fin de evitar algún uso distinto al expresamente previsto en la normatividad, así como evitar su alteración, pérdida, transmisión y uso no autorizado.

- El 21 de abril de 2021, el Sistema iniciará las validaciones contra la LNED, para determinar si puede continuar con el proceso de registro y el derecho de votación de las y los representantes en la casilla en que serán registrados.
- A partir de ese momento, el Sistema iniciará con los cruces de los datos de los representantes contenidos en las solicitudes de registro de acreditación que se encuentran en la LNED, contra las siguientes bases de datos:
 - Funcionario o funcionaria de Mesa Directiva de Casilla
 - (FMDC),
 - Listas de reserva de FMOC.
 - Sustituciones de FMDC,

- SE y CAE,
- Listas de reserva de SE y CAE,
- Observadores Electorales,
- Candidaturas aprobadas,
- Representantes de otros PPL, PPN y CI.

En el caso específico de los cruces que se realicen contra las listas de reserva de SE y CAE, y que resulten con observación, esto no deberá entenderse como una causal de rechazo, sino solamente como una alerta de su posible cambio de estatus a SE o CAE, por lo que las y los secretarios de los CD deberán acreditar las solicitudes que se encuentren en este supuesto.

Por otra parte, para garantizar la integración de las MDC, ningún ciudadano o ciudadana que haya sido designada como FMDC podrá ser acreditada como representante de PP o CI, ya sea que haya aceptado el nombramiento, sido sustituida, o bien, se encuentre en lista de reserva; razón por la cual, los CD deberán negar la acreditación de dichos ciudadano s y ciudadanas como representantes.

En cuanto a las y los ciudadanos que hayan sido acreditados por un PP o CI previamente, prevalecerá lo señalado en el artículo 261, numeral 1, inciso i) del RE; a excepción de cuando exista manifestación por escrito del ciudadano o ciudadana de su intención por ser representante de otro partido y ésta se presente a más tardar dentro del periodo de sustituciones, garantizando la protección de sus derechos en todo momento.

...

Fase 9. Sustituciones

El Sistema permitirá realizar la sustitución de representantes de forma individual y por lote desde el primer día de registro y hasta el 24 de mayo de 2021; durante el periodo exclusivo para sustituciones 25, 26 y 27 de mayo, sólo podrán realizarlas de forma individual.

Bajo ese contexto, se prevé una etapa para captura de solicitudes de acreditación de representantes que va del 16 de abril y hasta el 24 de mayo de 2021; y otra etapa de sustituciones, la cual se realizará desde el primer día de registro y hasta el 24 de mayo de 2021, y adicionalmente previó otro periodo para su realización de manera individual (25, 26 y 27 de mayo).

En el caso, está demostrado que el *PVEM* realizó la captura de las acreditaciones de ambas denunciantes el 05 de mayo de 2021, y posteriormente realizó su sustitución el 21 de mayo de 2021.

En ese sentido, aún cuando realizó la sustitución, el partido político denunciado no justificó, ni aportó elementos probatorios suficientes e idóneos que permitieran a esta autoridad electoral suponer que el registro de María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas, se llevó a cabo, conforme a derecho, derivado de un consentimiento, libre y voluntario para fungir como representantes de casilla en las secciones 1602 Básica y 1609 Contigua, respectivamente, del Consejo Distrital 13 en Huatusco, Veracruz, proporcionando sus datos personales para dicha finalidad y que, por ende, ejerciera de forma debida el derecho de nombrar a quienes lo representen ante las mesas directivas de casilla.

Por lo que, en el caso, debe señalarse que el debido ejercicio del derecho de los partidos políticos de nombrar a quienes los representen ante mesa directiva de casilla o a sus representantes generales, permite el adecuado encausamiento, evitando así invasiones o trasgresiones en la vigencia de otros derechos; pues de forma contraria, atentaría contra la esencia misma del Derecho y de la Justicia.

En ese sentido, **esta autoridad electoral considera que existe un indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrar a quienes lo representen en un distrito electoral e, intrínsecamente, para la configuración de esa falta, utilizaron sin autorización sus datos personales**, lo cual, debe ser considerado por esta autoridad para la imposición de la sanción.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

A similar conclusión arribó este *Consejo General* al emitir, entre otras, las resoluciones **INE/CG1667/2021**, **INE/CG1678/2021** e **INE/CG80/2022**, las dos primeras del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, y la tercera cuatro de febrero de dos mil veintidós, que corresponden a los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/MEGR/JD08/CDM/81/2021, UT/SCG/Q/SMS/JD05/PUE/32/2021, UT/SCG/Q/CMGP/JD04/CHIH/238/2020, respectivamente.

TERCERO. QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad del *PVEM*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

A. Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PVEM</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado al afiliar de forma indebida a dos ciudadanas, con lo que se transgreden disposiciones de la <i>Constitución</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> .	Transgresión al derecho ciudadano a una participación política libre e individual, así como el uso indebido de los datos personales de María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas, derivado del indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de	Artículos 6, 16 y 35, fracción III, de la <i>Constitución</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la <i>LGIPE</i> , 23, párrafo 1, inciso a) y 25 incisos a) y y), de la <i>LGPP</i> .

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
		nombrarlas como sus representantes ante mesas directivas de casilla	

B. Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En los artículos 1 y 35, fracción III de la *Constitución*, se establece la titularidad de los derechos humanos en beneficio de todas las personas y la libertad de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país, lo que conlleva, de forma implícita, el derecho a no ser asociado o vinculado para representar los intereses de un partido político.

En ese sentido, en los artículos 23, párrafo 1, inciso a) y 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP* se prevé el derecho de los partidos políticos de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral, así como de nombrar representantes ante los órganos del *INE* o de los Organismos Públicos Locales, así como la obligación de éstos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, en los artículos 6 y 16 de la referida Carta Magna, se reconoce el derecho a la protección de datos personales, mientras que el artículo 29, de la *LGPP* prevé que los partidos políticos deberán contemplar en sus Estatutos la forma de

garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos.

En el particular, se acreditó que el *PVEM*, transgredió el derecho de participación política libre e individual de María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas como representantes ante mesa directiva de casilla con el objeto de que éstas defendieran sus intereses ante un órgano electoral, con lo cual, además hizo uso indebido de sus datos personales, todo ello derivado del ejercicio indebido de su derecho constitucional y legal de nombrar representantes ante mesa directiva de casilla.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de participación política libre e individual, así como de protección de datos personales de las y los ciudadanos mexicanos, los cuales son derechos humanos por los que se otorga a los individuos la decisión de ser o no vinculados con un partido político, ya sea por compartir o no su ideología o simpatizar o no con ésta, así como el poder de controlar su información personal, decidir con quién se comparte y para qué se utiliza con terceros, así como el derecho a que ésta se trate de forma adecuada, para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su titular; lo cual implica la obligación de los partidos políticos de hacer un debido ejercicio de su derecho constitucional y legal de nombrar a representantes ante mesas directivas de casilla, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes pretenden designar, efectivamente consintieron libremente ser acreditados.

C. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el *PVEM* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales, y aún las de la normativa interna del referido partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de las personas quejasas, esta situación conlleva a estar en presencia de una singularidad de la infracción o falta administrativa, consistente en la vulneración a su derecho ciudadano de participación política, así como el uso

indebido de sus datos personales derivaron, en el indebido ejercicio del derecho constitucional y legal del *PVEM* de nombrar a quienes lo representan ante mesas directivas de casilla, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PVEM*, consistieron en el indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de nombrar a representantes ante mesa directiva de casilla sin su consentimiento, en perjuicio de dos ciudadanas, haciendo uso indebido de sus datos personales y transgrediendo su derecho ciudadano a una participación política libre e individual.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, el registro denunciado se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, particularmente en el año dos mil veintiuno, durante el periodo del 16 de abril al 21 de mayo, plazo en el que el denunciado, mantuvo el registro de las quejas como sus representantes.
- c) Lugar.** La acreditación indebida denunciada se realizó como representantes de partido político ante mesas directivas de casilla ubicadas en Veracruz.

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del *PVEM*, en transgresión a lo previsto en los artículos 1, 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; y 25, párrafo 1, incisos a), e y), de la *LGPP*.

La falta se califica como dolosa, por lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

- El *PVEM* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de entidad de interés público, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- El *PVEM* está sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, se ensancha y amplía.
- El derecho ciudadano de participación política implica el derecho a no ser vinculado o relacionado con alguna fuerza política y, en ese sentido, a no ser registrado para defender sus intereses sin que obre consentimiento pleno e informado de los alcances de dicha representación.
- La acreditación de una ciudadana o ciudadano como representante ante Mesa Directiva de Casilla o como representante general, sin que se haya manifestado su consentimiento, afecta directamente la honra, reputación e imagen de la persona, en contravención de lo establecido en los artículos 1 y 35, fracción III, constitucionales, así como 11, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- El ejercicio del derecho humano a la protección a la información que se refiere a la vida privada y los datos personales que debe tener cualquier partido político, como lo es el *PVEM*, conlleva un deber positivo a cargo de los institutos políticos, consistente en resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde consten datos de carácter personales, tanto de sus militantes, como de aquellas personas que no tengan relación con dicho partido político.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- El uso indebido de datos personales sin el consentimiento de los titulares de éstos, realizado por un partido político, como el *PVEM*, es una violación de orden constitucional y legal.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Las quejas aducen que en ningún momento manifestaron su consentimiento o autorización para que el *PVEM*, las acreditara como sus representantes ante mesa directiva de casilla, e hiciera uso de sus datos personales.
- 2) Quedó acreditado que el *PVEM* transgredió sus derechos ciudadanos de participación política e hizo uso indebido de esos datos personales.

- 3) El partido político denunciado no demostró, ni probó que las quejas hayan dado su autorización para que se hiciera uso de sus datos personales para acreditarlas como sus representantes ante mesa directiva de casilla para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PVEM*, se cometió derivado del ejercicio indebido de su derecho constitucional y legal de nombrar a quienes los representan ante mesas directivas de casilla sin su consentimiento, lo cual derivó en la violación al derecho a no ser vinculado con dicho partido político, en relación con el derecho a una participación política libre e individual, así como un uso indebido de datos personales en perjuicio de María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el *PVEM*, este organismo electoral autónomo considera que **no se actualiza**.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como

agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**³⁴

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, debe precisarse que, en el presente asunto, no puede considerarse actualizado dicho supuesto por cuanto hace al *PVEM*, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se haya sancionado a ese instituto político por faltas como la que se sancionan por esta vía, que se hayan dictado con anterioridad a los hechos materia de las presentes denuncias.

³⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, y para cada partido político, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Que se tiene por acreditada la transgresión al derecho ciudadano de participación política libre e individual, al haber vinculado a dos ciudadanas con el partido político denunciado sin que ésta hubiera otorgado su consentimiento para ello.
- Que se tiene por acreditada la utilización indebida de datos personales derivado del indebido ejercicio del derecho constitucional y legal de los partidos políticos de nombrar a quienes lo representan ante mesa directiva de casilla, sin su consentimiento.

- Se trató de una conducta dolosa, puesto que el *PVEM*, en cualquier caso, tiene el deber positivo de no vincular a los ciudadanos que no hayan accedido explícitamente a ello, así como de resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde consten datos de carácter personal, tanto de sus militantes, como de aquellas personas que no tengan relación con dicho partido político, lo que, en el particular, constituyó una violación de orden constitucional y legal.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- No existe reincidencia por parte del *PVEM*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PVEM* como de **gravedad ordinaria**.

C. Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción acreditada), así como la conducta realizada por el PRI se determina que debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer, debe recordarse que la *LGIPE*, confiere a la autoridad electoral, cierta discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realicen una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE* no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Con base en lo anterior, este *Consejo General* estima que, derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PVEM**, justifican la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana sobre quienes se cometió la falta acreditada**, equivalente a **642 (seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización** vigentes en **dos mil veintiuno**.

Lo anterior, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**³⁵ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

En ese sentido, se impone al **PVEM** una **MULTA** total de **1284** (mil doscientas ochenta y cuatro) **Unidades de Medida y Actualización vigentes en dos mil veintiuno**,³⁶ equivalentes a la cantidad de **\$115,072.08** (ciento quince mil setenta y dos pesos 08/100 M.N.) [calculado al segundo decimal].

³⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica:
<http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

³⁶ <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia 10/2018, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**³⁷

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PVEM** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del **PVEM** aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/02997/2022**, emitido por la **DEPPP**, se advierte que al **PVEM** le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de octubre de dos mil veintidós, la cantidad de \$19,751,300.62 (diecinueve millones setecientos cincuenta y un mil trescientos pesos 62/100 M.N.).

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa el porcentaje de **0.58%**.

³⁷ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinoso, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—⁶⁸ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el **PVEM**, una vez que esta resolución haya quedado firme.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,³⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se acredita la infracción consistente en el indebido ejercicio del derecho constitucional y legal del Partido Verde Ecologista de México, de acreditar a **María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas** como representantes ante mesa directiva de casilla, sin su consentimiento y el uso de

³⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

datos personales para tal efecto, en términos del Considerando **SEGUNDO**, de esta Resolución.

SEGUNDO. En términos del Considerando **TERCERO**, de la presente resolución, se impone al **PVEM**, una multa consistente en **1284 (mil doscientas ochenta y cuatro)** Unidades de Medida y Actualización equivalentes en **115,072.08 (ciento quince mil setenta y dos pesos 08/100 M.N.)** por designar sin el consentimiento de las ciudadanas referidas como representantes ante mesa directiva de casilla para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, conforme a los montos que se indican a continuación:

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer
1	María Dionisia González Colorado	642 (Seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$57,536.04 (Cincuenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.)
2	Rosa María Hernández Rosas	642 (Seiscientos cuarenta y dos) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$57,536.04 (Cincuenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 04/100 M.N.)

TERCERO. La presente resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79, del mismo ordenamiento.

NOTIFÍQUESE, al **Partido Verde Ecologista de México** por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General, **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; personalmente a María Dionisia González Colorado y Rosa María Hernández Rosas;** y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDGC/JD13/VER/209/2021

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**